

De 1900 a 2004: El fin de las *dos Españas* y la consolidación de la democracia

Temas de introducción

1. ¿Podrías hacer una lista de los hechos históricos más importantes que se produjeron en los EE.UU. y en el mundo durante el siglo XX?
2. ¿Cuáles son, a tu juicio, las transformaciones económicas sociales y culturales más importantes que experimentaron los EE.UU. durante el siglo XX? ¿Cómo afectaron éstas a sus ciudadanos? ¿Qué avances hubo en el terreno de los derechos civiles —libertad de prensa, de asociación, igualdad ante la ley, derecho al voto, etc.?
3. La crisis económica mundial de los años treinta comenzó con la caída de Wall Street en octubre de 1929 y pronto se extendió por todo el mundo. ¿Crees que se puede producir hoy una crisis financiera de las mismas proporciones? ¿Por qué?
4. Desde 1939 hasta 1975 España estuvo gobernada por la dictadura del general Franco, un militar que había simpatizado con los fascismos europeos y que tuvo estrechas relaciones de amistad con Alemania e Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de esta guerra España sufrió las consecuencias de un bloqueo internacional liderado por los EE.UU. En las décadas de la *guerra fría*, sin embargo, el gobierno estadounidense ofreció ayuda diplomática y militar a Franco. ¿Cuál fue la relación entre el gobierno de los EE.UU. y las diferentes dictaduras que existieron en la segunda parte del siglo XX? ¿Qué otros bloqueos económicos conoces?
5. En las siguientes páginas verás que la clase media resultó fundamental para la consolidación de la democracia en España. ¿Crees que una clase media fuerte es importante para el mantenimiento de un sistema democrático estable? ¿Por qué?
6. Hemos visto que a finales del siglo XIX se organizaron en España diversos movimientos nacionalistas que exaltaban lo propio de una determinada región o localidad en contraste con lo “español” común a toda la nación. Hoy en día, el sentimiento local es tan fuerte que muchos ciudadanos se sienten por igual —o mucho más— vascos, catalanes o gallegos que españoles. ¿Existen movimientos similares en los EE.UU.? ¿Se identifican sus ciudadanos más con la nación y la bandera o con su lugar de origen, su estado, su etnia o su estilo de vida? ¿Por qué crees que esto es así?

1 Introducción

Durante el siglo XX los españoles vivieron cambios históricos espectaculares. De la monarquía de principios de siglo se pasó a la Segunda República y ésta condujo a la guerra civil y a la dictadura de Franco. El desarrollo económico y social de los años sesenta y setenta, el crecimiento de la clase media y la voluntad de reconciliación hicieron posible el final de la división histórica de las *dos Españas* y fueron la base fundamental para el establecimiento de una democracia estable.

El siglo XX vio también una explosión intelectual y artística sólo comparable a la que se produjo durante el *Siglo de Oro*, y fue testigo de otros fenómenos sociales y culturales de gran importancia, tales como el nuevo papel de la mujer, la secularización del Estado y la sociedad, la consolidación de la democracia, la integración en la *Unión Europea* y en la OTAN, la recepción de emigrantes procedentes del Tercer Mundo y Europa Oriental y las nuevas relaciones con Latinoamérica.

Durante los últimos años se recrudeció también el llamado “problema vasco”, agravado por las acciones violentas de la organización terrorista ETA (Euskadi ta Askatasuna, *Patria vasca y libertad*) que persigue la separación del País Vasco del Estado español. El nacionalismo radical y el terrorismo se han convertido en las principales amenazas para la democracia española.

2 El reinado de Alfonso XIII (1902–1930): Del desastre del 98 a la dictadura de Primo de Rivera

El reinado de Alfonso XIII —que se extendió desde su acceso al trono en 1902 hasta la proclamación de la Segunda República en 1931— fue un periodo de gran conflictividad política y social que tuvo dos partes bien diferenciadas. La primera (1902–1923) se caracterizó por la continuación del sistema bipartidista de turnos en el poder; la segunda (1923–1930), que comenzó con el golpe militar de Primo de Rivera, implantó en España una dictadura. A pesar del atentado contra la vida del rey (1906), de la creación de nuevos partidos de ideología republicana (el Partido Radical y el Partido Reformista) y del giro republicano del PSOE, durante los primeros años del siglo la Corona consolidó su prestigio y su legitimidad, lo que hizo que el cambio de régimen no estuviera presente en el debate político español hasta bien entrados los años veinte.

La crisis del bipartidismo

Como se ha mencionado, el sistema bipartidista establecido por Cánovas a finales del siglo XIX continuó funcionando durante la primera fase del reinado de Alfonso XIII. Tras los sucesos de 1898, conservadores y liberales aceptaron los ideales *regeneracionistas* que se reflejaron en las acciones de gobierno de ambos partidos. Los gobiernos conservadores de Silvela (1899 y 1900) y —sobre todo— de Antonio Maura (1904, 1907–1909) tomaron medidas para mejorar la educación —creación de la Junta para la Ampliación de Estudios y de la

Residencia de Estudiantes— aprobaron leyes sociales —Ley electoral, Ley de huelga— y reactivaron la política exterior. Maura, además, inició un ambicioso proyecto de consolidación del Estado —reforma de la administración local, sensibilidad hacia los regionalismos y lucha contra el caciquismo y el fraude electoral— que no pudo concluir. La extrema dureza con la que su gobierno reprimió las protestas que se produjeron durante la llamada *Semana trágica* de Barcelona —de la que se hablará más tarde— hizo que Maura perdiera la confianza del rey y forzó su dimisión.

José Canalejas, nuevo líder del Partido Liberal que sucedió a Maura en el gobierno, fue responsable de reformas como la introducción del servicio militar obligatorio, la regulación de las condiciones de trabajo, la autorización del culto protestante y el apoyo a la creación de la Mancomunidad de Cataluña. Su gobierno se enfrentó a numerosas huelgas entre 1910 y 1913, lo que le valió la oposición de la izquierda.

El bipartidismo acabó haciendo crisis en 1913, tras la negativa de Maura a seguir el sistema de turnos y suceder en el poder al Partido Liberal. Desde 1914 hasta 1923 ninguno de los dos partidos logró —a pesar del fraude electoral— reunir la mayoría necesaria para gobernar, lo que dejó al país en un estado casi permanente de crisis política. El sistema bipartidista de la Restauración fue incapaz de evolucionar —como lo hicieron otros regímenes europeos— hacia la creación de un verdadero sistema democrático.

El auge del movimiento obrero

Mientras la vida política oficial seguía dominada por la inercia del *bipartidismo* y el *caciquismo*, en las calles, las fábricas y las minas aumentaba la fuerza de un movimiento obrero cuya ideología antimonárquica, revolucionaria y anticapitalista estaba alimentada por la extrema desconexión entre la España oficial y la real y por las crecientes diferencias entre el nivel de vida de la burguesía y el de los trabajadores urbanos y rurales.

El descontento popular con el gobierno se manifestó en las numerosas huelgas y protestas que ocurrieron entre los años 1909 y 1913. La más sangrienta de todas ellas fue la mencionada *Semana trágica* de Barcelona (1909), que se produjo cuando una huelga convocada para protestar contra la recluta de jóvenes para la guerra colonial de Marruecos acabó en una confrontación abierta entre anarquistas y pistoleros al servicio de los empresarios, y entre los sindicatos y el ejército.

Aunque la neutralidad española en la *Primera Guerra Mundial* (1914–1917) benefició al sector industrial —que incrementó sus beneficios por el aumento de la demanda— su impacto en la economía nacional fue negativo porque provocó una fuerte subida de la inflación que duplicó el precio de los productos de primera necesidad entre 1914 y 1920. La ola de huelgas que se desencadenó durante estos años —212 en 1914, 460 en 1918 y más de 1.000 en 1920— puso la economía en una situación cada vez más precaria y deterioró la unidad social del país.

Sucesos como éstos hicieron que la Corona española —como las otras monarquías de un continente sacudido por los movimientos revolucionarios— fuera perdiendo prestigio y viabilidad.

Los nacionalismos

El crecimiento de los nacionalismos periféricos añadió complejidad a una situación política ya de por sí difícil. En Cataluña, la *Lliga Regionalista* —fundada en 1901— se convirtió en el centro de un catalanismo político con el que simpatizaban muchos sectores de una burguesía industrial que había sintonizado progresivamente con el movimiento cultural de la *Renaixença*. Esta burguesía sentía una profunda irritación por la pérdida de los mercados coloniales y consideraba al aparato administrativo de Madrid culpable del retraso general de España. En el País Vasco —sobre todo en Vizcaya— fue creciendo el resentimiento del sector católico y antiliberal de la clase media rural hacia la alta burguesía “españolista” partidaria de la industrialización y del desarrollo urbano, y hacia los trabajadores industriales procedentes de otras regiones del país. Alrededor de 1920 apareció también un movimiento nacionalista gallego, aunque fue mucho más débil que el vasco o el catalán.

A pesar de que estos movimientos estaban cada vez más presentes en la vida política nacional y de que lograron triunfos electorales relativamente importantes, la comisión que se creó en 1919 para estudiar el problema regional no satisfizo sus demandas descentralizadoras, con lo que el nacionalismo se radicalizó y se fue separando del orden constitucional.

La dictadura de primo de Rivera (1923–1930)

La inestabilidad social, los constantes disturbios callejeros, la derrota de las tropas españolas en Marruecos en 1921, el asesinato del Jefe del Gobierno (Eduardo Dato) en el mismo año y la incapacidad de la clase política para resolver los problemas del país hicieron que algunos mandos militares se plantearan la intervención del ejército como la única manera de sacar a la nación de la crisis. En septiembre de 1923 el general Miguel Primo de Rivera se sublevó en Barcelona y terminó con el sistema constitucional que el propio ejército

¿SABÍAS QUE...?

EL DESASTRE DE ANNUAL

El moro Abd-el-Krim, empleado en el gobierno militar del Rif español —norte de Marruecos— fue a protestar ante el general Silvestre de los abusos de los oficiales españoles contra los civiles de la región. Según los rumores de la época, Silvestre humilló y abofeteó a Abd-el-Krim, y éste juró venganza. Tras estudiar la situación de las tropas españolas, Abd-el-Krim organizó una guerrilla de treinta mil hombres y preparó una trampa que atrajo a las tropas coloniales a un lugar desprotegido, donde las atacó por sorpresa y les causó miles de bajas. El gobierno se vio obligado a pedir ayuda

a Francia —país que controlaba parte de Marruecos— para hacer frente a la sublevación. En Madrid, mientras tanto, los partidos políticos de izquierda pidieron una investigación inmediata sobre el desastre. Esta investigación fue encargada al coronel Picasso, quien encontró muchos indicios de incompetencia en las actuaciones de varios políticos y militares. La defensa del honor del ejército fue una de las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera, quien ordenó parar la investigación tras tomar el poder.

había instaurado en 1874. Alfonso XIII —que seguía siendo el jefe del Estado— reconoció el golpe y encargó a Primo de Rivera la formación de gobierno.

A diferencia de los pronunciamientos del siglo anterior, el golpe de 1923 no fue protagonizado por unos pocos militares con inquietudes políticas, sino por el ejército, una institución que se consideraba a sí misma por encima y al margen de la política. De acuerdo con esta mentalidad, el ejército definía la esencia de lo español y constituía la única garantía para la estabilidad y la unidad del país. La dictadura de Primo de Rivera tuvo consecuencias muy importantes para la historia de España no sólo porque trajo un régimen republicano sino —y principalmente— porque su concepción del ejército y de la patria inspiró a los militares que se rebelaron contra la República en la década siguiente.

Primo de Rivera, que era considerado un hombre honrado y enemigo de la corrupción, no encontró apenas oposición en un país asustado por el radicalismo anarquista y cansado de las crisis políticas. La dictadura estableció un régimen antiparlamentario, burocrático y estatalista apoyado en la fuerza del ejército y marcado por la preocupación por la unidad nacional, la lucha contra la influencia de los caciques, el intervencionismo en la economía y el acercamiento a las antiguas colonias. Las primeras medidas del nuevo gobierno fueron claramente represivas: supresión de la constitución y las Cortes, sustitución de los gobernadores civiles por militares, disolución de la Mancomunidad de Cataluña, censura de prensa e ilegalización de los sindicatos anarquistas. Además, Primo de Rivera cerró instituciones culturales como el *Ateneo* de Madrid y se enfrentó a los intelectuales, quienes lo criticaron constantemente desde la prensa y la universidad.

A pesar de que la dictadura consiguió éxitos importantes —el fin de la violencia en las calles, la victoria sobre los rebeldes de Marruecos (1925), la recuperación económica (hasta la crisis de 1929) y el aumento de las exportaciones industriales— no pudo acabar con el descontento de muchos sectores sociales, que continuaron enfrentándose a ella. Pronto —como veremos más adelante— la dictadura entraría en crisis y desembocaría en la Segunda República.

3 La economía y la sociedad de principios del siglo XX

Las primeras tres décadas del siglo XX fueron testigos de un rápido crecimiento de la población española —que pasó de 18,3 millones de habitantes en 1900 a 24,5 millones en 1930— acompañado de una disminución significativa de la emigración al exterior y de la mortalidad infantil. Al mismo tiempo, la demanda de mano de obra de las industrias instaladas en las grandes ciudades aumentó la movilidad geográfica de los trabajadores, que se desplazaron desde sus lugares de origen a otras regiones más desarrolladas.

La mayoría de la población activa seguía trabajando en la agricultura, sector que experimentó cierta mejoría por la expansión de los regadíos y del uso de abonos y por el aumento momentáneo de la demanda europea debido a la Primera Guerra Mundial (1914–1917). El crecimiento de la población, sin embargo, impidió establecer excedentes alimentarios de forma estable. La agricultura española continuó siendo esencialmente latifundista, y los trabajadores del campo —sobre todo los del sur— seguían clamando por una reforma

¿SABÍAS QUE...?

LOS REGENERACIONISTAS

Se llama *regeneracionistas* a un conjunto de intelectuales españoles de finales del siglo XIX y principios del XX que pretendían “regenerar” o reformar el país analizando sus problemas y proponiendo soluciones “desde arriba”. Así expresaba los ideales de cambio Joaquín Costa —uno de los principales representantes de esta corriente intelectual— en un discurso de 1901:

En una cosa estamos de acuerdo los españoles [...] para que [España] se redima y resurja a la vida de la civilización y de la historia necesita una revolución, o lo que es igual, tiene que mudar de piel, romper los moldes viejos que Europa rompió ya hace más de medio siglo; sufrir una transformación honda y radical de todo su modo de ser, político, social y administrativo; acomodar el tipo de su organización a su estado de atraso económico e intelectual y tomarlo nada más como punto de partida, con la mira puesta en el ideal, el tipo europeo. [...] La revolución que España necesita tiene que ser, en parte, exterior, obrada por representantes de poderes sociales; en parte, interior, obrada dentro de cada español, de cada familia de cada localidad, y estimulada, provocada o favorecida por el Poder público también. En este sentido hablamos de una revolución hecha desde arriba, desde el poder.

Muchos de los escritores de la generación del 98 compartieron con los regeneracionistas —en palabras de Azorín, uno de los miembros de la mencionada generación— “un espíritu de protesta, de rebeldía” que “comenzaba a inquietar a la generación anterior”. No todos los intelectuales, sin embargo, mostraban entusiasmo por las ideas de

cambio o por los logros alcanzados. Miguel de Unamuno, uno de los más importantes intelectuales españoles, veía así el regeneracionismo en su ensayo de 1898 “La vida es sueño”:

Todos estamos mintiendo al hablar de regeneracionismo, puesto que nadie piensa en serio en regenerarse a sí mismo [...] ¡Regenerarnos! ¿y de qué, si de nada nos hemos arrepentido? [...]

En rigor no somos más que los llamados, con más o menos justicia, intelectuales y algunos hombres públicos los que hablamos de la regeneración de España [...].

El pueblo, por su parte [...] Oye hablar de todo eso como quien oye llover, porque no entiende lo de la regeneración. [...] Mira con soberana indiferencia la pérdida de las colonias nacionales, cuya posesión no influía lo más mínimo en la felicidad o en la desgracia de la vida de sus hijos [...]. ¿Qué se le da con que recobre o no España su puesto entre las naciones? ¿Qué gana con eso? ¿Qué le importa la gloria nacional? [...] ¡Cosas de libros!

Y el novelista Pío Baroja tenía en 1926 la siguiente idea de la intelectualidad de la época:

La generación nacida hacia 1870 [...] Fue una generación excesivamente literaria. Creyó encontrarlo todo en los libros. No supo vivir. [...] La gente idealista se lanzó al intelectualismo y se atracó de teorías, de utopías, que fueron alejándola de la realidad inmediata. [...] A pesar de esto, fue una generación más consciente que la anterior y más digna; pretendió conocer lo que era España, lo que era Europa, y pretendió sanear al país. Si al intento hubiera podido unir un comienzo de realización, hubiera sido de esas generaciones salvadoras de una patria.

agraria —distribución equitativa de la tierra y mejoras en su explotación y productividad— que nunca llegaba.

El primer cuarto de siglo fue también muy beneficioso para los sectores industrial, financiero y de servicios. Las transformaciones más intensas en la vida económica de este periodo, sin embargo, giraron alrededor de la mejora de las infraestructuras. Los gobiernos dieron un impulso decidido a la construcción de carreteras, ferrocarriles y pantanos y a la renovación urbana. Los planes de urbanización —los *ensanches* de las ciudades promovidos a finales del siglo XIX— modernizaron gran parte de los espacios urbanos, preparándolos para el

automóvil y dotándolos de servicios más adecuados al nuevo modo de vida, tales como mercados, mataderos, agua corriente, alcantarillado, luz eléctrica y transportes públicos. El intervencionismo económico de Primo de Rivera se manifestó en la creación de algunas grandes empresas nacionales como la *Compañía Telefónica* (1924), que contribuyó a la popularización del uso del teléfono —de 60.292 teléfonos en servicio en 1922 se pasó a unos 212.360 aparatos en 1930. Otras empresas importantes fueron la CAMPSA (1927), que tuvo el monopolio de la distribución de gasolina, y la línea aérea *Iberia* (1927). El desarrollo del automóvil fue tardío pero relativamente exitoso. España llegó a fabricar un coche de lujo —el *Hispano-Suiza*— que tuvo un gran prestigio internacional. Durante los primeros veinte años del siglo se fundaron en Madrid tres grandes bancos —*Hispanoamericano*, *Central* y *Español de Crédito*— que permanecieron activos hasta finales del siglo XX y que todavía hoy existen, aunque fusionados con otros o entre sí.

El aumento de la demanda estimuló el crecimiento de las industrias metalúrgicas (Vizcaya, Valencia) y textiles (Cataluña) y de la explotación del carbón (Asturias, Vizcaya). En el breve espacio de ocho años —entre 1910 y 1918— el número de obreros de la industria del metal se multiplicó por tres. Las condiciones de trabajo de estos obreros eran muy duras: sólo se les pagaba por día trabajado, la jornada laboral era de diez a doce horas para hombres, mujeres o niños y los salarios eran tan bajos que a veces era difícil sobrevivir durante los periodos de carestía de alimentos. Estas condiciones empujaron a los trabajadores a afiliarse a sindicatos como el anarquista Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) y el socialista Unión General de Trabajadores (UGT). Gracias a los sindicatos, los obreros españoles llegaron a crear cientos de *cooperativas obreras* de crédito y de consumo que sustituyeron el papel protector del Estado.

La vida española de principios de siglo siguió caracterizada por la tensión entre la tradición y la renovación. Hacia 1920 algunos aspectos de la estructura social de la nación habían experimentado cambios fundamentales y otros continuaban como en 1875. A pesar del importante crecimiento —en tamaño e influencia— de las clases medias durante este periodo, las diferencias entre los niveles de vida y los valores de los burgueses adinerados y “modernos” y los trabajadores eran cada vez más pronunciadas. Además, la clase media urbana, profesional y liberal estaba dividida entre los deseos de *regeneración* y la desconfianza ante las formas más radicales del movimiento obrero. El triunfo de la revolución rusa agravó la ansiedad de las clases medias europeas, lo que resultó en una obsesión por el orden y acabó contribuyendo a la aparición de los fascismos. La Iglesia, por su parte, fue incapaz de comprender los cambios que se estaban produciendo en el país, y reaccionó a ellos encerrándose en sí misma, adoptando posturas radicales contra enemigos reales o imaginarios —librepensadores, ateos, socialistas, anarquistas— culpando a la secularización y a la modernización de los problemas de la nación y pidiendo desde los púlpitos y los confesionarios el voto para los partidos opuestos a las reformas.

La vida privada de los individuos, y especialmente la de las mujeres, también estuvo marcada por el conflicto entre tradición y renovación. A comienzos del siglo XX el hogar y el matrimonio continuaban siendo el marco de la vida social de la mujer española, cuya vida estaba marcada por las etapas tradicionales de hija, esposa y madre. La todavía escasa presencia femenina en el mercado laboral estaba limitada al servicio doméstico o a trabajos agrícolas e industriales poco especializados. Durante las tres primeras décadas del siglo

se produjeron cambios fundamentales que permitieron la incorporación de un número creciente —aunque todavía modesto— de mujeres a algunas profesiones liberales, —maestras y enfermeras principalmente— al comercio, a los transportes y a la administración pública. El acceso femenino al mundo laboral fue limitado tanto por la mentalidad tradicional como por la discriminación. Para contrarrestar esta última, diversos gobiernos promulgaron leyes que regulaban los derechos de la mujer trabajadora y crearon centros de educación y formación. Los sindicatos, por su parte, lanzaron campañas de captación y afiliación, e incluyeron a las mujeres en sus reivindicaciones laborales. Al mismo tiempo que se producían estos cambios en el mundo laboral, la prensa comenzó a publicar anuncios de productos destinados al uso femenino cuyas modelos atléticas, activas y vestidas a la última moda indicaban el nacimiento de una nueva manera de entender el cuerpo y la estética femeninos y el papel social de la mujer. En esta época apareció un movimiento feminista muy heterogéneo —había grupos católicos, laicos y radicales— heredero del trabajo de base de muchas mujeres del siglo XIX que luchó por la igualdad de derechos y obtuvo algunos éxitos.

El aumento de la población urbana provocado por el desarrollo industrial concentró en las ciudades una parte importante de los votos, y las convirtió en el centro de la vida política del país. Esta población urbana fue creando, durante las tres primeras décadas del siglo, el embrión de una nueva cultura del ocio basada en los espectáculos de masas. Algunos de estos espectáculos ya existían en el siglo XIX (fiestas populares, toros, zarzuela, teatro); otros alcanzaron una nueva dimensión (especialmente los viajes y el deporte) y otros (como el cine) fueron novedades posibilitadas por los nuevos adelantos tecnológicos. La canción y el baile se separaron del teatro y adquirieron importancia en sí mismos, dando origen a los cabarets o a los “café cantantes”. La nueva importancia adquirida por el deporte —fútbol, automovilismo, ciclismo, golf, tenis— revelaba una nueva concepción del cuerpo humano y un mayor énfasis en la salud y la higiene, características ambas del proceso de modernización de la sociedad. Con el desarrollo de los medios de transporte los veraneos comenzaron a adquirir una gran importancia entre la clase alta, y poco a poco se fueron generalizando entre las clases medias. Las clases populares, en cambio, seguían viajando únicamente para desplazarse a trabajos estacionales como la siega o la vendimia.

4 La Segunda República (1931–1936)

La caída de la dictadura de Primo de Rivera y el fin de la monarquía

A partir de 1928 la situación política y económica de España volvió a empeorar. La crisis política vino determinada por la convocatoria —sin consulta popular— de una Asamblea Nacional Consultiva para redactar una constitución destinada a legitimizar el régimen autoritario y conservador de Primo de Rivera. Esta acción fue rechazada por los sectores sociales ya descontentos con la dictadura —los intelectuales, los estudiantes, los catalanistas y el movimiento obrero— que comenzaron ahora a oponerse abiertamente a ella y a expresar su descontento en las calles. A la crisis política se unieron pronto los problemas económicos, provocados por la retirada de las inversiones que la banca extranjera tenía en España —a consecuencia del desastre de Wall Street (1929)— y por la pérdida de valor de la moneda nacional —la peseta. El dictador ni pudo ni quiso continuar al frente del país y presentó su dimisión en 1930.

¿SABÍAS QUE...?

AUTOMÓVILES DE LUJO: LOS HISPANO-SUIZA

En 1901 el empresario español Emilio de la Cuesta contrató los servicios del ingeniero suizo Mark Birkigt para construir el primer automóvil nacional. En 1903 apareció el primer modelo que ya presentaba interesantes novedades técnicas respecto a los coches de la época, como la bomba de agua y la caja de cuatro velocidades. Pero la empresa de automóviles *La Cuadra* no prosperó, y fue comprada por Damián Mateu, que decidió mantener a Birkigt como director técnico y cambió su nombre al de *Sociedad Anónima Hispano-Suiza*.

En 1905 los directivos de la compañía se informaron de que el rey iba a viajar en automóvil a Valencia, le siguieron en un modelo Hispano-Suiza y en una cuesta le adelantaron a gran velocidad. El rey quedó impresionado por la potencia de ese coche y encargó uno para su uso personal. A partir de entonces el monarca se convirtió en un entusiasta de la marca, llegó a poseer varios de sus modelos e incluso dio nombre a uno de ellos en 1908.

En 1911 la empresa construyó una sociedad filial en Francia. En 1912 el modelo "Sardina" ganó

varias competiciones, lo que aumentó el prestigio deportivo de los Hispano-Suiza. A comienzos de la Primera Guerra Mundial, la sección francesa de la compañía fabricó motores de avión que tuvieron una gran aceptación internacional, y en 1917 se fundó otra fábrica en Guadalajara (España) para construir camiones para el ejército español.

Los años veinte fueron una época dorada para la marca Hispano-Suiza, que tuvo en el mercado varios modelos de lujo y deportivos y llegó a vender un sistema de frenos a la prestigiosa Rolls Royce británica. La compañía superó la crisis económica de los años treinta, pero no pudo sobrevivir a la Guerra Civil española y acabó cerrando sus puertas. Después de la guerra el gobierno utilizó las instalaciones que Hispano-Suiza tenía en Barcelona para construir otro automóvil genuinamente español, el *Pegaso*, que, aunque de buena calidad, no tuvo mercado ni capital suficiente para sobrevivir más de quince años. A finales de los años cincuenta la marca *Pegaso* pasó a fabricar exclusivamente camiones y tractores para el mercado nacional.

La proclamación de la Segunda República

Tras un año de confusión institucional, el 12 de abril de 1931 se celebraron unas elecciones cuyos resultados manifestaron de nuevo la existencia de *dos Españas*: la progresista de las ciudades grandes, los núcleos industriales y mineros y muchos pueblos del sur, que había votado a candidatos socialistas y republicanos, y la conservadora del norte y el centro rural, donde ganó la derecha monárquica. Dos días después (el 14 de abril) se proclamó la Segunda República Española y el ejército, que contaba en sus filas con muchos oficiales republicanos, aceptó la voluntad popular y se retiró de la arena política. El rey Alfonso XIII abandonó definitivamente España y partió al exilio. La caída de la dictadura había supuesto, entonces, el fin de la monarquía que la había legitimado.

La República no recibió el apoyo unánime de los españoles. Fue recibida con esperanza y entusiasmo por los sectores de tradicional inclinación republicana —la mayoría de clase media liberal y urbana, los movimientos obreros— e incluso por algunos conservadores y católicos que veían en el nuevo régimen una oportunidad única para reformar el país y para afrontar los enormes retos de la modernización. España necesitaba con urgencia fortalecer el poder civil y librarlo de la excesiva influencia del ejército y de la Iglesia, refor-

mar la estructura de la propiedad agraria, el sistema de enseñanza y la administración pública, reconocer los nacionalismos periféricos y atraer inversiones extranjeras en un momento en el que la depresión castigaba a toda Europa y a Norteamérica. Hubo también quienes la detestaron abiertamente, como los militantes de la *Falange* —un movimiento de carácter fascista y antiburgués— y la derecha monárquica más reaccionaria —que veía con recelo los avances del movimiento obrero. Otros grupos la consideraron como un simple medio para el logro de sus fines particulares. Tal fue el caso de las facciones más radicales del movimiento obrero —que vieron en ella una oportunidad para impulsar sus planes revolucionarios— los anarquistas —que buscaban la destrucción total del Estado— y el *Partido Comunista* —que tenía como objetivo el establecimiento de una *dictadura del proletariado*. Las propias fuerzas republicanas no llegaron a alcanzar un acuerdo básico sobre el modelo de estado que tendría que surgir con el nuevo régimen. Los socialistas estaban divididos entre los *socialdemócratas* —que creían en el cambio desde dentro del sistema— y los partidarios de una revolución al estilo soviético. La derecha moderada, por su parte, quería una república basada en el orden y la tradición, y los catalanistas buscaban una república federal que garantizara la autonomía de las regiones.

El profundo desacuerdo social y la falta de cohesión del movimiento republicano hicieron muy difíciles las tareas de gobierno. Las reformas y las leyes introducidas por los distintos presidentes fueron consideradas radicales por la derecha y tímidas por la izquierda, y acabaron por no satisfacer a nadie. En este ambiente, el enfrentamiento entre las *dos Españas* era inevitable. ?

Los gobiernos republicanos

La Segunda República se puede dividir políticamente en tres fases, que coinciden con los periodos de gobierno de los tres presidentes elegidos en las votaciones de 1931, 1933 y 1936. La primera fase (1931–1933) comenzó tras la victoria de la coalición republicana-socialista (dirigida por Manuel Azaña) en las elecciones de junio de 1931, y tuvo un carácter fuertemente *reformador*. El nuevo gobierno redactó una Constitución izquierdista, laica y progresista —que se aprobó el 9 de diciembre del mismo año— y comenzó inmediatamente a tomar medidas para solucionar los que, a su juicio, eran los principales problemas del país. Azaña afrontó la *reforma agraria* mediante una ley de expropiación de latifundios y de reparto de las tierras entre los campesinos, decretó varias leyes laborales que regulaban y mejoraban las condiciones de trabajo de los obreros urbanos y rurales, se ocupó de la reforma y democratización del ejército y dio un impulso importantísimo a la cultura y a su difusión entre todas las capas de la población. Además, hizo efectiva la separación entre la Iglesia y el Estado, tomó medidas para limitar la influencia social de la primera, aprobó la libertad de culto, legalizó el divorcio, estableció —por primera vez en España— el matrimonio civil y creó un sistema de enseñanza público y laico (entre 1931 y 1933 se fundaron unas 10.000 nuevas escuelas). En los terrenos administrativo y político, Azaña abrió la puerta a la descentralización y a la concesión de autonomía a ciertas regiones y extendió el derecho de voto a las mujeres.

La naturaleza de las reformas del gobierno y la agresividad con la que se implantaron acabaron polarizando la vida política nacional y creando un amplio descontento, tanto entre los sectores conservadores —que veían estas reformas como excesivamente radi-

cales— como entre la izquierda —que consideraba que los cambios no eran suficientes. Así pues, el gobierno de Azaña irritó a la Iglesia —que estaba descontenta por la pérdida de su poder social— al ejército —que veía desaparecer algunos de sus privilegios— a los terratenientes —que no querían perder sus propiedades— y a organizaciones como la CNT —que esperaban que el gobierno encabezara una revolución.

La segunda fase de la República (1933–1936) tuvo un carácter *conservador*, y comenzó tras la victoria de la *Confederación Española de Derechas Autónomas* (CEDA), un partido de la derecha que quería romper con el sistema democrático de 1931 y crear un estado conservador y católico. A pesar de su victoria electoral, la CEDA no obtuvo los votos suficientes para gobernar en solitario, por lo cual tuvo que aliarse con otros partidos en coaliciones frágiles —hubo siete gobiernos en unos dos años— que diluyeron los programas políticos del presidente. Los gobiernos de la derecha pararon el impulso reformador del periodo azañista devolviendo las tierras expropiadas a la aristocracia, paralizándolo el proceso autonómico, concediendo subsidios públicos al clero y reprimiendo el movimiento obrero. El descontento de la izquierda, de los sindicatos y de los obreros ante las actuaciones del gobierno conservador se manifestó de nuevo en numerosas revueltas sociales, la más importante de las cuales fue la que estalló en las zonas mineras de Asturias en 1934, y que fue reprimida con dureza. Organizaciones como la UGT y los sindicatos de izquierda radical consideraron terminada la etapa de colaboración con lo que llamaban la “democracia burguesa” y adoptaron posturas abiertamente revolucionarias. Al mismo tiempo, la desconfianza mutua y la crispación entre la derecha —que no quería la república— y la izquierda —que no aceptaba a la CEDA como parte de ésta— se tradujo en una ola de violencia que convirtió las calles españolas en escenarios de continuos asesinatos de políticos y militantes de uno u otro signo cometidos por pistoleros falangistas, anarquistas y comunistas.

En este ambiente de tensión se celebraron las elecciones de febrero de 1936, que dieron la victoria —con poco más de un tercio de los votos— al *Frente Popular*, una coalición de partidos republicanos e izquierdistas. Daba comienzo así la etapa *revolucionaria*, el tercer y último periodo de la Segunda República. El triunfo de la izquierda marcó el principio de un movimiento revolucionario espontáneo que afectó a muchas zonas del país y que se manifestó en la ocupación de tierras, en las huelgas, en los asesinatos políticos y en el asalto a edificios religiosos. Durante esta época se hizo más obvio que nunca el desacuerdo existente entre las diversas fuerzas de la izquierda republicana y la tensión entre las Españas conservadora y progresista. Los socialistas aspiraban a cambiar el sistema gradualmente, los comunistas querían su propia revolución al estilo ruso y desconfiaban de los excesos de la izquierda más extremista y los anarquistas no respetaban propiedad o institución alguna y buscaban la abolición del propio Estado. Por su parte, los fascistas de las *Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista* (JONS) y —sobre todo— de la *Falange Española* añoraban una España unida y orgullosa de su pasado imperial, y la derecha radical abandonó el proyecto republicano y comenzó a apoyar a importantes sectores del ejército que preparaban en secreto un golpe de Estado. El gobierno, mientras tanto, se veía incapaz de mantener la estabilidad y el orden público. Tras siglos de resentimiento, las *dos Españas* se encontraban ahora más enfrentadas que nunca.

¿SABÍAS QUE...?

MANUEL AZAÑA (1880-1940)

Manuel Azaña fue el presidente más brillante que tuvo la Segunda República Española (1931-1933 y 1936). Abogado y experto en temas jurídicos y en ciencias políticas y gran orador, publicó también gran cantidad de artículos académicos y varias novelas cortas y piezas de teatro y llegó a recibir el *Premio Nacional de Literatura* en 1926. En 1925 fundó Acción Republicana, un partido de centro-izquierda comprometido con las reformas y la modernización de España.

Azaña fue más radical por su temperamento que por su ideología, lo que le ganó muchos enemigos, sobre todo en las filas de la Iglesia católica, institución a la que culpaba del retraso social y cultural del país. Su personalidad combativa le valió también la enemistad de la derecha, que le consideró culpable de todos los problemas de la república y de sucesos como las revueltas obreras de Barcelona y la rebelión de Asturias. Después de la guerra Azaña se exilió en Francia, donde murió.

Odiado por muchos pero respetado por casi todos, la figura de Manuel Azaña ha quedado en la historia de España como la de un intelectual que se adelantó a su tiempo, un auténtico demócrata enamorado de las ideas republicanas que pagó un alto precio político y personal por ser consecuente con sus ideales.



Manuel Azaña en su despacho (1936)

El golpe de Estado de 1936

El ejército español se encontraba en 1936 casi tan dividido como la sociedad. La victoria del Frente Popular hizo que algunos de los militares más conservadores, que no habían ocultado nunca su disgusto con la República y sus reformas, comenzaran a plantearse la posibilidad de una intervención que restaurara la unidad de la patria y garantizara el orden social. Estos militares, como antes Primo de Rivera, veían al ejército como la esencia de "lo español" y la única institución capaz de salvar a la nación de los peligros republicanos.

Tras varios meses de conspiraciones secretas, el 18 de julio de 1936 el general Franco —entonces capitán general de Canarias— voló a Marruecos para ponerse al frente de las tropas de élite españolas estacionadas en el norte de África y levantarse contra la República. Al día siguiente se le unieron los generales Sanjurjo, Mola, Queipo de Llano y otros, así como un importante sector del ejército. Los sublevados contaban con el triunfo inmediato del golpe de Estado, pero se equivocaron. La rebelión acabó dividiendo al ejército y al propio país entre los defensores del orden constitucional republicano —los *republicanos*— y los partidarios del levantamiento militar —los *nacionales*. En estas condiciones, la guerra civil resultó inevitable.

5 La Guerra Civil española (1936–1939)

Las dimensiones del conflicto

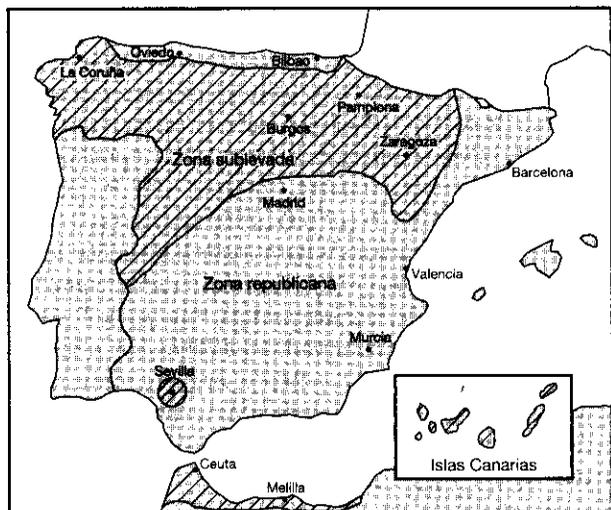
La Guerra Civil española fue un fenómeno de gran complejidad histórica, porque en ella se unieron factores legales, religiosos y de clase social y conflictos de carácter nacional e internacional. Desde un punto de vista puramente legal, fue una lucha entre un gobierno republicano, legitimado por unas elecciones democráticas, y un grupo de rebeldes antidemócratas que quería romper el marco político legal y sustituirlo por un régimen autoritario. El apoyo oficial de la Iglesia católica a los golpistas y la calificación de la contienda como *cruzada de liberación nacional* —con la oposición de tan sólo un obispo— pusieron al lado de Franco a millones de católicos, y dieron a la guerra un carácter marcadamente confesional. Aunque republicanos y nacionales contaron con el apoyo de individuos procedentes de todas las capas sociales, la pertenencia a uno u otro bando estuvo definida tanto por la *clase social* como por la ideología, y por ello constituyó un ejemplo del enfrentamiento entre capital y trabajo característico de la *lucha de clases*. La antigua aristocracia, la alta burguesía y los grandes propietarios y financieros se situaron mayoritariamente con los sublevados. El avión que trasladó al general Franco de las islas Canarias a Marruecos fue alquilado por Juan March, uno de los financieros más ricos del país, que además ofreció apoyo económico al general en caso de que el golpe no triunfara. Un gran número de obreros y sindicatos defendieron la república, y los más radicales de ellos, la revolución comunista o anarquista.

La internacionalización de la Guerra Civil se debió a que en España se estaban enfrentando, en un escenario limitado, las fuerzas políticas e ideológicas que competían por el dominio político en Europa, y que ahora esperaban impacientemente el resultado de una guerra que podría determinar su futuro en el continente. Estas fuerzas contendían en un triple nivel marcado por las dialécticas siguientes: 1) de capital contra trabajo (o capitalismo contra comunismo), 2) de fascismo contra comunismo (o totalitarismos de derecha contra totalitarismos de izquierda) y 3) de los sistemas democráticos contra los autoritarismos. Aunque las potencias

del continente se mantuvieron oficialmente neutrales, la presencia internacional en la Guerra Civil sería importante, como veremos a continuación.

Las Españas nacional y republicana

Pero volvamos al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El fracaso inicial del levantamiento militar dividió al país en *dos zonas geográficas*. La parte controlada por las guarniciones del ejército fieles al gobierno —Madrid, Cataluña, Levante, Bilbao, Asturias, Cantabria y partes de Andalucía y de Aragón— incluía las áreas industriales y las grandes ciudades y los territorios donde tenían más fuerza los partidos de izquierda, el movimiento obrero y los nacionalismos



España tras el Alzamiento del General Franco (finales de julio de 1936)

vasco y catalán. La zona sublevada o *nacional* —Castilla la Vieja, Navarra, Baleares, Galicia, Canarias, Zaragoza, Sevilla y los territorios del norte de África— correspondía casi exclusivamente a las provincias donde habían ganado las elecciones los partidos de derechas y representaba la España más católica y tradicional. En julio de 1936 la *zona nacional* contaba con sólo un tercio de la población del país, pero con las tres cuartas partes de su producción agrícola. En cuanto al ejército, los dos bandos contaron con un número similar de soldados, aunque gran parte de la marina y la aviación se mantuvo leal a la República, mientras que las tropas de élite africanas quedaron bajo el control de los sublevados.

¿SABÍAS QUE...?

HIMNOS Y CANCIONES DE LA GUERRA

El fascismo de la *Falange Española* no se puede identificar completamente con el alemán o el italiano. Aunque tuvo muchos elementos comunes con ellos, la fuerte tradición católica y la profunda base multiétnica del pueblo español impidieron que los fascistas españoles adoptaran posturas abiertamente racistas. Aunque sus principales líderes —José Antonio Primo de Rivera y Onésimo Redondo— hicieron comentarios ocasionales contra los judíos, los objetivos de sus ataques fueron principalmente los miembros de esta etnia fundadores del marxismo (Marx y Engels), y nunca cayeron en la paranoia racista de otros fascistas europeos.

El "Cara al sol" —himno de la Falange, que pasó después a ser utilizado por Francisco Franco en la dictadura— es un poema en el que el joven héroe le habla a su amada de su desprecio a la muerte y su ilusión por una nueva España de "vino y rosas":

*Cara al sol con la camisa nueva
que tú bordaste en rojo ayer
me hallará la muerte si me llega
y no te vuelvo a ver.
Formaré junto a mis compañeros
que hacen guardia sobre los luceros.
Impasible el ademán,
y están presentes en nuestro afán.
Si te dicen que caí
me fui al puesto que tengo allí.
Volverán banderas victoriosas
al paso alegre de la paz,
y traerán prendidas cinco rosas,
las flechas de mi haz.*

*Volverá a reír la primavera,
que por cielo, tierra y mar espera.
¡Arriba escuadras a vencer,
que en España empieza a amanecer!*

El bando republicano no contó con un himno propio y único, sino que sus combatientes y simpatizantes utilizaron varias canciones para simbolizar su ideología y su lucha contra el fascismo. De entre todas ellas reproducimos aquí la letra de la titulada "Si me quieres escribir":

*Los moros que trajo Franco
en Madrid quieren entrar
mientras queden milicianos
los moros no pasarán
Si me quieres escribir
ya sabes mi paradero.
Si me quieres escribir
ya sabes mi paradero,
Tercera Brigada Mixta
primera línea de fuego.*

*Aunque me tiren el puente
y también la pasarela,
me verás pasar el Ebro
en un barquito de vela.*

*En el Ebro se han hundido
las brigadas italianas,
y en los puentes sólo quedan
las que son republicanas.*

Al comienzo de la contienda, la diferencia fundamental entre ambos bandos radicaba en su nivel de organización. Ante la perspectiva de un enfrentamiento largo y generalizado con el gobierno, los líderes rebeldes confiaron la dirección del *Alzamiento nacional* —así llamaron a la rebelión— al general Francisco Franco, un militar prestigioso que se había distinguido en varias acciones bélicas y que era conocido por sus ideas católicas y conservadoras. Ayudado por algunas circunstancias —el asesinato del fundador de la Falange (José Antonio Primo de Rivera) en noviembre de 1936 y la crisis interna de carlistas y tradicionalistas— Franco consiguió unir a su alrededor a todas las fuerzas de la derecha.

Las fuerzas republicanas, en cambio, carecieron de una organización político-militar única durante los primeros meses de la contienda, en parte porque algunos dirigentes republicanos confiaban en el fracaso del levantamiento. Pero las causas principales de esta desorganización fueron el desacuerdo entre las diferentes facciones políticas republicanas y la reacción radical de los partidos obreros y sindicatos al golpe de Estado. La heterogeneidad de ideologías, intenciones y agendas políticas de los grupos que componían el Frente Popular se hizo aún más patente cuando algunas organizaciones de izquierda radical utilizaron el levantamiento como excusa para desencadenar procesos revolucionarios, confiscar propiedades o liquidar buena parte de las instituciones públicas, mientras que los intelectuales liberales y la clase media veían con horror el extremismo y la desorganización.

Con la intención declarada de resistir a las fuerzas franquistas, los distintos movimientos obreros tomaron las calles y formaron milicias que no sólo eran independientes del ejército republicano sino que a veces estaban enfrentadas a él. Estas milicias tenían un carácter ideológico —estaban formadas alrededor de partidos o sindicatos— y carecían de una organización y una dirección eficaces. Muchos de sus oficiales no contaban con experiencia militar alguna, y sus soldados no habían recibido el entrenamiento necesario para enfrentarse a un ejército regular.

El desacuerdo ideológico de las fuerzas republicanas, el movimiento revolucionario que se inició en la zona controlada por el gobierno tras el golpe militar y la ineficacia de las milicias fueron responsables, en parte, de la derrota republicana.

La internacionalización del conflicto

Como ya se mencionó anteriormente, las principales potencias declararon su neutralidad en la Guerra Civil, e incluso algunas de ellas llegaron a firmar un convenio comprometiéndose a respetarla. Francia e Inglaterra, asustadas tanto por la posibilidad de triunfo del fascismo como por la perspectiva de que una victoria del movimiento obrero convirtiera el país en una dictadura del proletariado al estilo soviético, decidieron no apoyar abiertamente a la república española. La Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler, el Portugal fascista y algunas corporaciones norteamericanas (GMC, TEXACO) acabaron ayudando a los rebeldes con hombres, materiales o dinero. A esta ayuda se sumaron contingentes de voluntarios idealistas del fascismo internacional que combatieron junto a las tropas franquistas. La República, por su parte, contó con el apoyo de la Unión Soviética y de las llamadas *Brigadas Internacionales*. La URSS contribuyó a la causa republicana con el envío de armas, dinero y comida y con los llamados *comisa-*

¿SABÍAS QUE...?

LAS OPERACIONES MILITARES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

La campaña militar se desarrolló en tres etapas. Inicialmente, los nacionales se fijaron como objetivo la toma de Madrid. Para ello, Franco avanzó con sus tropas africanas por el sur y el oeste de España, mientras Mola ocupaba San Sebastián y la frontera vasco francesa. Los nacionales consiguieron en unos pocos meses acercarse a las puertas de la capital por el norte y por el sur, pero fueron detenidos en el río Jarama por la resistencia republicana. El estancamiento del avance militar de los nacionales hizo patente que la guerra iba a ser larga, y por ello ambos bandos comenzaron a pedir ayuda exterior. A partir de este momento la guerra se internacionalizó, y las tropas y el armamento extranjeros hicieron acto de presencia en los campos de batalla. El bando nacional organizó muy pronto un estado paralelo. En octubre de 1936 Franco fue nombrado jefe del Gobierno y del Estado español, y un mes después recibió el reconocimiento oficial de Alemania e Italia.

Tras el estancamiento de la campaña sobre Madrid, las tropas franquistas llevaron la guerra al norte, desencadenando una gran ofensiva en el País Vasco. Después de contener dos contraofensivas republicanas, en 1937 tomaron Bilbao (junio), Santander (agosto) y Asturias (octubre). Con ello los nacionales ganaron el control de la costa can-

tábrica y de los centros industriales y mineros y dieron un golpe importante a la República.

La tercera etapa de la guerra estuvo marcada por el comienzo de la ofensiva nacional (octubre de 1937) por el valle del Ebro hacia el Mediterráneo, cuya costa alcanzaron en abril de 1938. El resultado de esta campaña fue la división en dos de la zona republicana, que aún abarcaba, además de Madrid, Cataluña, Valencia y partes de La Mancha y del sudeste. La República reaccionó con una contraofensiva liderada por el general Rojo (julio de 1938) quien consiguió cruzar de nuevo el Ebro y penetrar en los territorios nacionales. Las tropas de Franco detuvieron este avance y comenzaron una cruenta guerra de desgaste que destruyó la moral del ejército de la República. En diciembre de 1938 se inició una ofensiva nacional contra Cataluña que culminó un mes después con la caída de Barcelona, la toma de la frontera francesa y el exilio de medio millón de personas, entre las que se encontraban el presidente de la República y el general Rojo. En marzo de 1939 las tropas de Franco entraron en Madrid y ocuparon Alicante —la última ciudad republicana— donde tomaron como prisioneros a unos 14.000 republicanos militares y civiles.

rios políticos, consejeros del *Partido Comunista de España* (PCE) que pretendían reconducir el movimiento obrero español a la órbita prosoviética. Las Brigadas Internacionales eran grupos de voluntarios extranjeros —principalmente franceses, alemanes y norteamericanos— formados por simpatizantes de la izquierda y de los movimientos sindicalistas o por idealistas atraídos por la épica de la resistencia popular contra el fascismo. Entre estas tropas se encontraba la Brigada Lincoln, compuesta por unos dos mil norteamericanos.

La vida en la retaguardia

La vida en la retaguardia de ambos bandos estuvo caracterizada, aparte de por la escasez de alimentos y las penurias propias de una situación de guerra, por una cruel represión de los individuos y organizaciones sospechosos de simpatizar o colaborar con el enemigo. A medida que avanzaba la guerra, nacionales y republicanos iban extremando sus posiciones



Joven española en los años treinta

ideológicas y endureciendo sus actuaciones políticas. Los republicanos confiscaron las propiedades de los “burgueses” y de los que habían huido a la zona nacional, que pasaron a ser controladas por los grupos revolucionarios. En algunas zonas de España se llegaron a organizar experiencias revolucionarias y utópicas de carácter colectivista y anarquista, contrarias a la propiedad privada, al uso del dinero y a prácticas sociales como el matrimonio. Los elementos más radicales del republicanismo —comunistas y anarquistas— lanzaron una campaña de represión que se tradujo en el asesinato de muchos miembros del clero, de la burguesía industrial y de la aristocracia. Esta campaña tuvo su paralelo en el bando nacional, donde los rebeldes fusilaron a muchos maestros, a intelectuales —como García Lorca— a militantes izquierdistas o sindicalistas y a simpatizantes de la República. La represión causó decenas de miles de víctimas en ambos bandos y produjo heridas que continuaron abiertas en la conciencia colectiva de los españoles durante varias generaciones.

Consecuencias de la guerra

El 1 de abril de 1939, Franco proclamó oficialmente el fin de la guerra y la victoria de los nacionales. El triunfo de los franquistas acabó con

el esfuerzo democratizador y modernizador más importante y más serio de toda la historia de España, y dejó el país en manos de una dictadura que lo gobernaría durante los próximos cuarenta años. La guerra tuvo consecuencias muy negativas para la demografía, la economía, la sociedad y la cultura. La población activa disminuyó como consecuencia de las muertes producidas por los enfrentamientos bélicos —unas trescientas mil, cuarenta mil en el frente y el resto en las retaguardias— y del exilio —unas trescientas mil personas aproximadamente— o del encarcelamiento —más de un cuarto de millón— de muchos simpatizantes de la República. La economía del país estaba literalmente destrozada. Los constantes bombardeos de uno y otro bando habían destruido o dañado seriamente una parte importante de las infraestructuras del país —carreteras, ferrocarriles, redes eléctricas, puentes, etc.— de los campos de cultivo y de los complejos industriales. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento internacional del régimen de Franco —de los que se hablará en la próxima sección— impidieron la rápida recuperación de la economía, y convirtieron la siguiente década en un periodo de racionamientos y hambre. La sociedad española quedó dividida entre ganadores y perdedores que años después de la guerra todavía continuaban mirándose con resentimiento. Muchos simpatizantes o antiguos funcionarios republicanos pagaron con la pérdida de sus trabajos su apoyo al gobierno democrático y fueron relegados a los márgenes de la sociedad. El exilio de gran parte de los intelectuales y la implantación de la censura dieron un grave golpe a la cultura y a la educación, que quedaron ahora controladas por los ideólogos del franquismo y por la Iglesia.

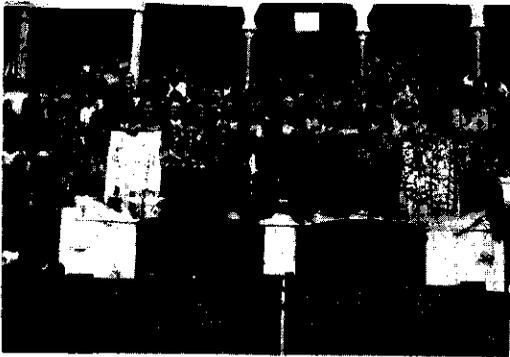
6 La dictadura de Francisco Franco (1939–1975)

Características fundamentales del franquismo

El régimen establecido en España tras la victoria de las tropas *nacionales* tuvo un carácter autoritario y personalista similar al de los fascismos europeos, aunque la personalidad y las creencias religiosas de Franco le dieron un perfil único que lo distinguía de aquellos fascismos en muchos aspectos. Además de su gusto por la retórica nacionalista y de la falta de libertades políticas y culturales, la dictadura franquista tuvo las siguientes características fundamentales: 1) creación de un Estado fuerte y centralizado y concentración del poder político y militar en un solo hombre: el *generalísimo*; 2) sistema cooperativista, siguiendo el modelo fascista de organización del Estado; 3) desmovilización política de la sociedad; 4) control cultural y educativo de la Iglesia en un Estado declarado oficialmente católico y 5) pobreza intelectual y creativa causada por la censura y el exilio de muchos de los mejores intelectuales. Los siguientes párrafos se ocupan brevemente de los primeros cuatro aspectos; el otro será tratado en el capítulo siguiente.

Desde el primer momento Franco asumió personalmente la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno (que ocupó hasta que en 1973 nombró un jefe de Gobierno), el mando supremo del ejército y el liderazgo de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el partido único del régimen que reunía a militantes y elementos ideológicos falangistas, carlistas y monárquicos conservadores. En el autoritarismo del general Franco se unieron simbologías procedentes de diferentes retóricas que idealizaban el pasado nacional: la falangista —que consideraba el Imperio Español como un bien supremo, un modelo de “unidad de destino en lo universal”— la carlista y tradicionalista —profundamente antiextranjera y anti-liberal— y la militarista que enfatizaba el orden y la unidad sagrada de la patria. La religión católica constituía el punto de unión de todas estas retóricas, y por ello se convirtió en el principal elemento de legitimación moral de la ideología del nuevo régimen. Franco —que se consideraba responsable, como a él mismo le gustaba repetir, “únicamente ante Dios y ante la historia”— supo dar protagonismo político a diversos sectores del Régimen según le convenía para adaptarse a los cambios históricos o a las necesidades de la política interior o exterior.

El franquismo colocó al ejército como base fundamental de la nación y lo convirtió en defensor de su esencia y de su unidad. El nuevo Estado se construyó en torno a algunos elementos de la ideología falangista, y su organización se concibió de manera jerarquizada y *cooperativista*. La “democracia orgánica” o “democracia vertical” franquista articuló la representación popular en las Cortes (creadas en 1942), un órgano legislativo cuyos miembros eran designados por el partido para representar los “cuerpos naturales” de la sociedad —la familia, el municipio y el sindicato— y que estaba subordinado a la voluntad del dictador. Con la policía y el ejército a su lado, la autoridad del generalísimo no fue nunca cuestionada dentro del sistema.



Público asistente a una corrida de toros en la década de 1940

El franquismo buscó activamente la despolitización de la sociedad a través de la sustitución de las ideologías políticas —especialmente las izquierdistas— por valores sociales tradicionales como la familia, el orden y el trabajo. El éxito de este proceso despolitizador hizo posible que la dictadura contara, durante décadas, con el apoyo de amplios sectores sociales.

Las etapas de la dictadura

El franquista no fue, sin embargo, un régimen estático, y a lo largo de sus cuarenta años de existencia evolucionó para adaptarse a las circunstancias políticas y económicas nacionales e internacionales. Desde el punto de vista económico, la dictadura de Franco se puede dividir en dos etapas claramente diferenciadas. La primera de ellas abarca los años cuarenta y cincuenta y está definida por la *autarquía*, un modelo económico de supervivencia autónoma que consistía en evitar la dependencia de los mercados internacionales mediante el impulso —dirigido desde el Estado— a la producción interna de todos los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del país. Con ese objeto se fundó (1941) el Instituto Nacional de Industria (INI) —un organismo público responsable de la creación de numerosas fábricas y empresas— y se crearon monopolios para la distribución de las gasolinas, la telefonía, la explotación de ciertos minerales y el transporte aéreo. A la vez, el gobierno impulsó las obras públicas y estableció controles sobre los salarios y los precios. En la segunda etapa —la década de los sesenta y los primeros años setenta— en cambio, el énfasis se desplazó al *desarrollismo* que, como su propio nombre indica, consistía en favorecer el crecimiento comercial e industrial. En estos años se produjo una auténtica revolución industrial y una apertura económica que permitieron a España entrar en los mercados internacionales.

Desde un punto de vista político, la dictadura de Franco puede dividirse en tres etapas: 1) posguerra y aislamiento internacional (1939-1951); 2) primera apertura al exterior (1951-1958) y 3) tecnocracia (1959-1975).

El primer periodo político de la dictadura (1939-1951) —el de *posguerra y aislamiento internacional*— estuvo caracterizado por el hambre y el racionamiento de alimentos y por una represión sistemática contra la oposición política y contra los nacionalismos. Como ya se mencionó, la destrucción de infraestructuras y cultivos durante la guerra y la situación política mundial impidieron la recuperación de la economía, que en 1950 tenía una tasa de producción inferior a la de 1936; el racionamiento, por su parte, continuó hasta 1951.

Durante estos años, los elementos falangistas del gobierno tuvieron un gran poder político, y controlaron la prensa, la propaganda y los sindicatos. A través de sus *sindicatos verticales* —de los que eran miembros obligatoriamente los empresarios y los trabajadores— los falangistas organizaron asociaciones de jóvenes (*Sindicato de Estudiantes Universitarios, Frente de Juventudes*) y de mujeres (*Sección Femenina*) que garantizaron y extendieron la presencia de la ideología falangista en la sociedad. Los falangistas fueron los inspiradores de una ley laboral (*Fuero del Trabajo*) que definía a España como un estado nacionalsindicalista —un concepto falangista— y contenía beneficios importantes para los trabajadores —como el derecho a las vacaciones y la jornada laboral de ocho horas— a cambio de la prohibición de las huelgas, de los sindicatos libres y de la nego-

ciación colectiva. En esta época también se eliminaron las reformas de la República: se devolvieron los bienes expropiados a sus antiguos propietarios, se paralizó la reforma agraria, se prohibieron la libertad de culto, el matrimonio civil y el divorcio y se otorgó a la Iglesia el monopolio ideológico de la educación. España se convirtió en un país oficial y jurídicamente católico, y el régimen participó en actos tan peculiares como la consagración de toda la nación a la Virgen María.

A pesar de que España no participó en la Segunda Guerra Mundial, la política exterior de la primera parte de este periodo estuvo marcada por la amistad con las potencias del Eje, especialmente con Alemania e Italia. Prueba de esta amistad fue el envío de la llamada *División Azul* —un contingente de tropas formadas por voluntarios en su mayoría falangistas— para luchar al lado de Alemania en el frente ruso. Para octubre de 1942, y en vista de las derrotas militares que estaba sufriendo el Eje, Franco inició una tímida aproximación a los aliados, aunque la cooperación con Alemania se mantuvo hasta el final de la guerra. Tras la derrota del fascismo en 1945, la posición internacional del régimen franquista se debilitó, ya que el nuevo orden mundial centrado alrededor de la recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU) no dejaba lugar para dictaduras. La ONU no sólo se negó a admitir a España sino que condenó al régimen español y recomendó a sus miembros la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas con él. Desde 1946 hasta 1950 Franco sufrió un bloqueo internacional sólo roto por el Vaticano, Argentina, Portugal y Suiza, que mantuvieron representantes diplomáticos en España.

Las consecuencias del aislamiento llevaron al dictador a reconsiderar la naturaleza del régimen y la posición de la Falange en el mismo. Comenzó así una operación destinada a eliminar los rasgos más fascistas del Estado y a sustituirlos por otros de apariencia más democrática. Esta operación terminó con la separación de los falangistas de los puestos de gobierno, el ascenso al poder de los sectores tradicionalistas y católicos y con la promulgación de nuevas leyes como el *Fuero de los españoles* (una declaración de los derechos de los ciudadanos), la *Ley del Referéndum* (que contemplaba la aprobación por votación popular de algunas leyes) y la *Ley de Sucesión* (que definía a España como reino). Aunque prácticamente vacías de contenido democrático, estas leyes significaban un alejamiento de la retórica fascista de los primeros años y una redefinición del franquismo como una democracia católica y orgánica.



Franco con dirigentes del régimen en 1951

El segundo periodo estuvo caracterizado por la *apertura al exterior* (1951–1958) y debe entenderse en el contexto de la *guerra fría* entre los aliados y la Unión Soviética. En estos años EE.UU., Inglaterra y Francia comprendieron que la dictadura de Franco era un mal menor, e incluso una posible aliada, en un mundo preocupado por el avance comunista. En 1951 los embajadores aliados volvieron a Madrid y España fue admitida en varios organismos de las *Naciones Unidas*. Dos años después España y los EE.UU. firmaron unos convenios de amistad por los que se creaban bases militares de utilización conjunta en territorio

español a cambio de una pequeña ayuda económica y de apoyo internacional al régimen de Franco. En el mismo año, España fue admitida en la ONU como miembro de pleno derecho. Aunque los años de aislamiento habían excluido al país del Plan Marshall (1948), cuando el presidente Eisenhower visitó Madrid en 1959 España ya se había integrado en la comunidad internacional. A pesar de la apertura política y el reconocimiento oficial del régimen, España no fue admitida en la Comunidad Económica Europea cuando ésta fue creada en 1956.

En el interior del país, los cambios doctrinales e institucionales experimentados por el régimen durante estos años provocaron fricciones entre los sectores católicos y falangistas, que fueron zanjados por Franco con la promulgación de la *Ley de Principios Fundamentales del Movimiento* (1958). Esta ley unificó a todas las familias políticas del régimen y marcó la derrota política de los falangistas.

Mientras tanto, la represión de la oposición se había hecho más selectiva. La tímida relación de la dictadura, sin embargo, no pudo evitar la aparición de algunas manifestaciones de protesta que eran reacciones a las crisis social, política y económica que se produjeron a mediados de los cincuenta. La crisis social se debió a la rebelión de los estudiantes de Madrid (1956), que el gobierno se apresuró a reprimir. A pesar de ello, el descontento de los universitarios revelaba la creciente separación entre las generaciones jóvenes y el régimen. La crisis política —que ocurrió en el mismo año— fue resultado de la concesión de la independencia al Marruecos francés, lo que obligó a Franco a hacer lo mismo con el Marruecos español y a librar una pequeña guerra en Ifni, otra colonia española del norte de África. La crisis económica se debió a la subida de la inflación y a las huelgas que se produjeron en el País Vasco, Cataluña y Asturias entre los años 1956 y 1957. Aunque Franco logró resolver estas crisis sin mayores problemas, los sucesos de mediados de los cincuenta pusieron de manifiesto las debilidades y contradicciones del franquismo y sus limitaciones en las esferas social, económica e internacional y marcaron el comienzo de un periodo en el que muchos sectores reclamaron al régimen cambios sustanciales.

La intensificación de la *guerra fría* y la recuperación económica de Europa Occidental marcaron el comienzo de la tercera etapa de la dictadura de Franco. De 1940 a 1960 España ya había experimentado cambios económicos y demográficos muy importantes:

en este periodo la renta nacional se había duplicado, el país había pasado de 26 a 31 millones de habitantes, el porcentaje de población rural había disminuido notablemente y cientos de miles de personas se habían instalado en los núcleos urbanos e industriales de Madrid, Cataluña y el País Vasco tras abandonar las zonas agrícolas de Castilla, Extremadura y Andalucía. A pesar de todo ello, el nivel de vida de los españoles todavía se encontraba muy por debajo del de los ciudadanos de otros países europeos como Francia, Inglaterra y Alemania. Para aproximar el país al resto del continente, el franquismo realizó otra serie de cambios e inició su etapa tecnocrática.



Francisco Franco con el presidente Eisenhower, 1959

Los años de la *tecnocracia* (1959–1975) trajeron transformaciones sociológicas, políticas y económicas aún más profundas a un país que estaba saliendo rápidamente de la pobreza y la autarquía económica. Estos cambios fueron una consecuencia del abandono de los ideales económicos de inspiración falangista característicos de los primeros años del franquismo y de la incorporación al gobierno de una serie de tecnócratas, muchos relacionados con la organización integrista católica *Opus Dei*, que llegó a constituir un importante grupo de poder dentro del Estado. Dichos tecnócratas estabilizaron y liberalizaron la economía mediante una política de *Planes de Desarrollo* encaminados a transformar España en un país industrial y urbano. Estos planes consiguieron reforzar la importancia de las zonas tradicionalmente industriales y promovieron la construcción de infraestructuras y el desarrollo de algunas áreas del país en las que no existía tradición industrial (Burgos, Zaragoza, Cádiz, etc.). Los Planes de Desarrollo tuvieron un éxito desigual. Por un lado, contribuyeron a la mejoría del mercado nacional y al desarrollo de algunas zonas atrasadas, al crecimiento de las ciudades y de la economía —en 1970, el 75% de la población trabajaba ya en la industria o en los servicios— y al establecimiento de una nueva clase media robusta que, por fin, se convirtió en la capa social más importante de la política española. También mejoraron sustancialmente el nivel de vida de los españoles: en 1975 el 40% de las familias españolas tenía automóvil y el 85% televisión, en contraste con el 4 % y el 1% de 1960; la renta per cápita, que en 1960 era de tan sólo 300 dólares, ascendió a 2.486 dólares en 1975 (hoy es de unos 23.000). Por otro lado, el desarrollismo creó desequilibrios importantes entre las regiones más desarrolladas y las más atrasadas, permitió un desarrollo urbano improvisado y desorganizado, sacrificó la agricultura y obligó a muchos españoles a emigrar a Europa en busca de trabajo.

Los cambios sociales que se produjeron en este periodo fueron tan importantes como los económicos. Los emigrantes españoles que regresaban del extranjero y los turistas que comenzaban a visitar España traían, además de divisas para la economía, las ideas y los valores de los países democráticos de donde venían. Estos valores se fueron extendiendo poco a poco por la creciente clase media española y contribuyeron a la progresiva secularización de la vida pública y al deseo de progreso y de mayores libertades públicas. La Ley de Prensa de 1966 trajo consigo una tímida apertura y una mayor tolerancia con las publicaciones y los espectáculos —que ya no estaban sujetos a una censura tan estricta— e incluso permitió la publicación de algunas revistas de ideas opositoras (*Cuadernos para el diálogo*, *Triunfo*) y de libros escritos en las otras lenguas del Estado. El aumento del número de estudiantes universitarios y la inevitable influencia de las modas y los valores europeos y norteamericanos modernizaron sociológica y culturalmente un país que todavía vivía en una “minoría de edad” política. En el terreno religioso, a la ya mencionada secularización hay que añadir la influencia del *Concilio Vaticano II*, que trajo desde Roma aires renovadores a la Iglesia católica española, un sector de la cual —los *curas progresistas*— comenzaba a ver a la dictadura con franca hostilidad. El nombramiento en 1969 de Enrique y Tarancón —un liberal partidario de la ruptura con el franquismo— como obispo de Madrid fue un duro golpe para el régimen, que comenzaba a perder el apoyo incondicional de la Iglesia y, con él, uno de sus argumentos legitimadores.

Los cambios políticos fueron también significativos, pero no tuvieron tanto alcance como los culturales y los sociológicos. Como ya se ha mencionado, desde 1959 la mayoría de los ministerios pasaron a manos de los católicos “tecnócratas”, quienes modernizaron la

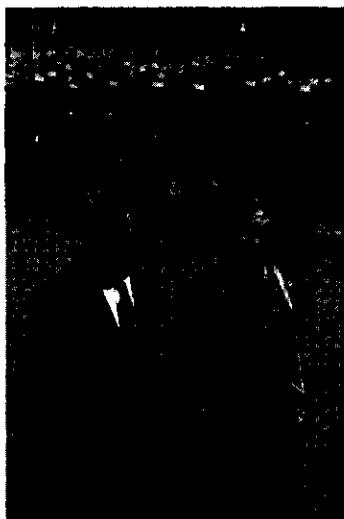
administración del Estado e hicieron de la economía el factor prioritario de las acciones de gobierno. Durante este periodo se promulgó Ley Orgánica del Estado (1967), una especie de constitución franquista que separaba los cargos de *presidente del gobierno* y *jefe de Estado*, reconocía la libertad religiosa y definía España como monarquía. En 1969, Franco designó sucesor al príncipe Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII y nacido en el exilio italiano, pero educado en España desde 1948.

El fin del franquismo

En los años sesenta se fueron definiendo dentro del franquismo y del país diferentes corrientes ideológicas —la demócrata-cristiana, la liberal y la socialdemócrata— que buscaban la *apertura* del régimen para sentar las bases de un sistema democrático en la España posfranquista. Estas corrientes comenzaron a utilizar poco a poco las cátedras universitarias, las revistas e incluso los púlpitos de las iglesias para crear sus órganos de opinión. Los *aperturistas* —casi todos franquistas jóvenes moderados— comenzaron a chocar con los *inmovilistas* de la vieja guardia representada por los falangistas, los tradicionalistas y los elementos más radicales del ejército. Una vez más, Franco supo mantener el equilibrio entre estas tendencias internas del franquismo sin dañar su autoridad sobre ambas.

A mediados de la década de los sesenta, la contradicción entre una sociedad industrial, urbana y moderna y un gobierno autoritario y antidemocrático era ya muy obvia. La oposición al régimen se había hecho más fuerte y más variada y, después de años de operar en el exilio, comenzaba extender sus acciones —de manera ilegal o semi-ilegal— al interior del país. Las huelgas obreras organizadas por los nuevos sindicatos ilegales —entre los que figuraba el comunista *Comisiones Obreras*— en favor de las libertades públicas y sindicales eran cada vez más difíciles de reprimir. A pesar de la represión, los conflictos laborales fueron muy numerosos durante todo este periodo, especialmente en Madrid y en las regiones industriales. Los estudiantes universitarios, por su parte, comenzaron a protestar de manera sistemática contra el régimen; la policía llegó a ocupar y cerrar algunas universidades y a expulsar a alumnos y a conocidos profesores. Al mismo tiempo, el problema regional afloró de nuevo con fuerza en muchas regiones —especialmente en Cataluña y el País Vasco— y amenazó la propia unidad de España. Especialmente importante fue el nacimiento de ETA (Euskadi ta Askatasuna, o Euskadi y Libertad), una organización de ideología nacionalista que defendía el uso de la violencia para conseguir la independencia del País Vasco y que acabaría convirtiéndose en uno de los más graves problemas del Estado. La conflictividad laboral y las revueltas estudiantiles amenazaban el mantenimiento de la paz social, y el resurgimiento de los nacionalismos ponía en cuestión la unidad misma de la nación. Dos de los pilares fundamentales de la ideología y la propaganda franquistas —el orden social y la unidad de la patria— comenzaban a debilitarse.

Tras una crisis interna por un asunto de corrupción industrial, Franco nombró vicepresidente del gobierno al almirante Carrero Blanco, un militar conservador que se enfrentó a la escalada de huelgas y a los ataques de ETA que se produjeron entre 1971 y 1973 con una mezcla de políticas represivas y de fomento del desarrollo económico —la economía creció muy rápidamente durante estos mismos años. Después de su asesinato a manos de ETA (1973), accedió a la vicepresidencia Carlos Arias Navarro, quien acabó con la tecnocracia



Los reyes de España, Don Juan Carlos I y Doña Sofía (1988)

del Opus Dei y prometió una auténtica apertura del régimen y una nueva actitud conocida en la época como el *espíritu del 12 de febrero*. Las tímidas reformas de Arias Navarro decepcionaron tanto a los que defendían una ruptura democrática con el régimen —las fuerzas políticas anti franquistas radicales como el Partido Comunista, Comisiones Obreras y el Partido Socialista Obrero Español— como a los propios *aperturistas* que pedían un cambio desde dentro. A pesar del fracaso de estas medidas, el espíritu del 12 de febrero contribuyó a revitalizar la vida política y a conformar la conciencia democrática de un país que cada vez veía más evidentes las contradicciones internas del franquismo: un régimen católico criticado por la Iglesia, una monarquía sin rey, una dictadura que pretendía mantenerse en el poder mediante cambios democratizadores y un régimen que no había conseguido legitimarse ni consolidar su continuidad. Cuando Franco murió el 20 de noviembre de 1975, se hizo evidente que la dictadura era un régimen inviable que había muerto con su fundador. El debate entre la reforma y la ruptura pasó entonces al primer plano de la vida española.

7 La transición a la monarquía democrática

Desde 1975 hasta 1982 España pasó por un periodo histórico conocido con el nombre de *transición* que consistió en la liquidación del Estado autoritario franquista y su sustitución por un régimen monárquico, parlamentario y democrático. El sentido de responsabilidad de los protagonistas de esa transición —el rey Juan Carlos I, los partidos de izquierda (PCE, PSOE), los sectores franquistas moderados, la Iglesia, el ejército, los sindicatos, los universitarios y los intelectuales— hizo posible que, a pesar de las incertidumbres y la confusión, este proceso de cambio tuviera éxito y terminara, de una vez por todas, con la confrontación entre las *dos Españas*.

La subida al trono de Juan Carlos I

En la ley que regulaba su sucesión, Franco había dispuesto la restauración de una monarquía continuista en la persona del entonces príncipe Juan Carlos —nieto de Alfonso XIII— que seguiría gobernando España respetando los principios básicos y las instituciones del franquismo. Muy pronto Juan Carlos I dejó muy claro que no tenía la intención de respetar los deseos del fallecido dictador y que llegaban tiempos de cambio. En su primer discurso ante las Cortes (el 22 de noviembre de 1975), el nuevo rey declaró que su proclamación como rey abría una “nueva etapa en la historia de España” centrada en lograr la “concordia nacional” y en crear una sociedad “libre y moderna” integrada en Europa y gobernada por un sistema político que reconociera los derechos y las libertades de los españoles y las “peculiaridades regionales” y que garantizara “la participación de todos” en la vida política.

La transformación de España en un Estado de derecho no podía ser instantánea. Las instituciones, los órganos de poder y el ejército estaban todavía en manos de los franquistas y eran leales a los principios del Movimiento Nacional que Juan Carlos quería transformar. Por ello

el primer gobierno de la monarquía —que duró seis meses— estuvo presidido por Arias Navarro —el último jefe de gobierno de Franco— y formado por políticos franquistas. Este gobierno se apresuró a decretar varias reformas —indultos, libertad de prensa, reconocimiento de los partidos políticos— pero carecía de la legitimidad necesaria para cambiar el sistema político de raíz. El propio Arias era un franquista convencido que sólo aspiraba a transformar el Movimiento Nacional en una especie de democracia controlada que permitiera la continuidad del régimen. En protesta por la timidez de las reformas del gobierno, a principios de 1976 se produjo una oleada de huelgas y manifestaciones en favor de la libertad sindical, la amnistía para todos los presos políticos, la autonomía regional y la convocatoria de elecciones libres. El rey aceptó la dimisión de Arias —a quien sólo había considerado como una solución temporal para contentar a los franquistas más radicales— y nombró jefe del gobierno a Adolfo Suárez, un político joven que provenía de las filas del franquismo reformador.

El nombramiento de Suárez fue recibido con desconfianza por la oposición, que veía en él otro continuista al estilo de Arias. Para contrarrestar estas reticencias, Suárez anunció de inmediato su intención de convocar elecciones generales y de redactar una nueva constitución democrática; decretó una primera amnistía, legalizó los derechos de reunión, asociación y propaganda y estableció contactos con los dirigentes del PSOE y del Partido Comunista, todavía ilegales en aquellos años. En octubre de 1976, y tras obtener la aprobación del ejército, Suárez preparó la Ley para la Reforma Política, que sentaba las bases de la transición a un Estado democrático y que fue aprobada primero por las Cortes franquistas y luego por los españoles en votación popular. El camino hacia la democracia, sin embargo, continuó lleno de obstáculos. A los peligros derivados de la creciente conflictividad social —terrorismo, manifestaciones violentas— se unió el delicado equilibrio que Suárez y el rey tuvieron que mantener con la vieja guardia franquista —a la que había que convencer de que las reformas eran lo suficientemente moderadas como para mantener el espíritu del Movimiento Nacional— y con la oposición democrática —que todavía desconfiaba del gobierno y de su programa de “reformas desde dentro”. El apoyo que Suárez recibió de amplios sectores de la oposición a finales de 1976 supuso un voto de confianza a las intenciones reformadoras del rey y del gobierno y una garantía de estabilidad.

A partir de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, las reformas se sucedieron a velocidad vertiginosa. A mediados de 1977 ya se habían legalizado todos los partidos políticos, incluidos los nacionalistas y el Partido Comunista de España (PCE). La legalización del PCE —el mayor partido de la izquierda en aquel tiempo— fue particularmente problemática, ya que contó con la oposición de muchos sectores de la derecha franquista y del ejército y fue rechazada por el Tribunal Supremo. La decisión de Suárez de autorizar las actividades políticas del PCE por decreto-ley fue duramente criticada por los militares y estuvo a punto de provocar un golpe de Estado. Al final, el ejército acabó acatando la decisión del presidente, aunque dejando claro que lo hacía por patriotismo y respeto al rey, y no por obediencia al gobierno. La aceptación de la monarquía y la bandera españolas y la responsabilidad y visión de Estado de los dirigentes comunistas fueron sin duda un factor clave para estabilizar la situación.

Las elecciones democráticas de 1977 y la Constitución de 1978

En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936, que dieron la victoria a la Unión de Centro Democrático (UCD), un partido de centro-derecha

¿SABÍAS QUE...?

DON JUAN CARLOS I (1938-)

El rey de España, Don Juan Carlos I de Borbón, rige con éxito una nación en la que un porcentaje importante de los ciudadanos era, hace unas pocas décadas, indiferente a la monarquía. Cuando tomó posesión de la Corona en 1975 pocos esperaban que pudiera mantenerse como rey, pues veían su legitimidad "contaminada" por la protección que había recibido del general Franco. Sin embargo, su activo papel en la defensa de la democracia durante el intento de golpe de Estado del coronel Tejero (1981), su personalidad amable y tranquila, su sentido del humor populista y su frugal estilo de vida le han ido ganado la simpatía de los españoles y han hecho que incluso los políticos de izquierdas y los nacionalistas hayan mostrado siempre respeto hacia su persona.

Los más de veinticinco años de reinado de Juan Carlos I han cambiado radicalmente la valoración popular de la monarquía. Según una encuesta publicada por el diario *El País* en el año 2000, el 84% de los españoles tenía una valoración del monarca "buena" o "muy buena", en contraste con el 4% que la califica de "mala" o "muy mala". La Corona es además considerada como la institución que mejor ha desarrollado sus funciones en los últimos veinticinco años, por delante de los medios de comunicación, las Cortes y los gobiernos autonómicos. El 78% de los encuestados reconocía que el rey había sabido adaptarse muy bien a los difíciles momentos históricos de las últimas tres décadas, y el 91% creía que la monarquía parlamentaria iba a continuar siendo la forma de gobierno de España en el futuro inmediato.

fundado por el propio Suárez y apoyado por los reformistas moderados que, aunque carecía de ideología propia, cumplió a la perfección el papel de llevar al país del franquismo a la democracia de manera gradual y pacífica. En estas elecciones se consolidaron también las fuerzas que protagonizarían la vida política de los próximos años. Junto a la UCD —que obtuvo el 34,5% de los votos— surgieron el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Comunista de España (PCE) y Alianza Popular (AP) —el partido heredero de la derecha franquista— que contaron con el 29,3%; el 9,4% y el 8,3% de los votos respectivamente. Además, los partidos nacionalistas contaron con victorias importantes, como la del PNV en el País Vasco y la de Convergència i Unió en Cataluña.

Las Cortes que salieron de estas elecciones se dieron la tarea de redactar una nueva constitución y prestaron una atención prioritaria al problema de las regiones. Durante esta época se restableció la Generalitat catalana, se creó el Consejo General Vasco y se formaron instancias preautonómicas en otras regiones.

La Constitución de 1978, que fue aprobada en votación popular por el 88% de los españoles, convirtió a España en una Monarquía Parlamentaria democrática y en un Estado de Derecho aconfesional, garantizó las libertades de los ciudadanos, abolió la pena de muerte, reconoció la libertad de pensamiento, prensa, asociación, enseñanza y empresa y estableció el sufragio universal para todos los españoles mayores de dieciocho años. En el terreno institucional, creó un sistema parlamentario de dos cámaras (el Congreso y el Senado) y limitó el papel del rey a ser moderador del sistema. Una vez aprobada la Constitución, se pusieron en marcha las reformas necesarias para su aplicación.

La crisis de UCD, el intento de golpe de Estado y el triunfo del PSOE

Mientras el proceso democratizador avanzaba en los planos político e institucional, la recién creada democracia continuaba enfrentándose a numerosos problemas en la calle. De entre éstos destacó el creado por la organización terrorista ETA, que incrementó sus atentados —asesinó a 236 personas entre 1975 y 1980, muchas de ellas militares y policías— con la intención de incitar al ejército al golpe de Estado y así hacer fracasar la transición y legitimar su lucha por la independencia del País Vasco. Los terroristas estuvieron a punto de conseguir sus objetivos, ya que el 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero ocupó el Congreso y anunció un golpe de Estado militar. Afortunadamente, el rey pudo controlar la situación y asegurarse el apoyo y la lealtad de la policía, la Guardia Civil y todos los mandos militares con excepción de Jaime Milans del Bosch —entonces Capitán General de Valencia— que secundó el golpe y sacó las tropas a la calle. La misma madrugada del día 24 Juan Carlos I anunció en televisión el fracaso del golpe, y pocas horas después Tejero, Milans y otros conspiradores se rindieron y fueron detenidos.

Tras el intento golpista asumió la presidencia del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, un político de la UCD que en sus años al frente del gobierno —y a pesar de la crisis interna de su propio partido— supo mantener la autoridad civil, aprobó la Ley del Divorcio y la Ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico y convirtió a España en miembro de la OTAN.

Las elecciones de 1982 dieron la victoria al PSOE y marcaron la desaparición de la UCD, que no pudo resistir las tensiones entre sus diferentes facciones ideológicas y acabó descomponiéndose en varios partidos más pequeños. Estas elecciones marcaron asimismo el retroceso del Partido Comunista y la moderada subida electoral de Alianza Popular, el partido de la derecha conservadora liderado por el ex franquista reformador Manuel Fraga. Con el fracaso del golpe de Estado, la victoria socialista y la transferencia pacífica del poder a la izquierda se liquidó definitivamente el Estado franquista y se completó la transición al sistema democrático.

8 España en democracia: 1982–2004

Los veintidós años que median entre la victoria del PSOE en 1982 y el año 2004 se pueden dividir políticamente en dos etapas que corresponden a los años de gobierno socialista (1982–1996) y al periodo de gobierno conservador (1996–2004). Los cambios que experimentó España durante ambas etapas fueron importantísimos, y acabaron transformando todos los aspectos de la vida nacional de manera radical. Las líneas que siguen presentan un panorama de los hechos más significativos ocurridos durante esos años. El resto del libro estudia con más detalle diferentes aspectos de la nueva sociedad española que emergió de los cambios mencionados.

Los gobiernos socialistas (1982–1996)

El Partido Socialista (PSOE) presentó a los españoles un programa político que combinaba el progresismo político y la justicia social con la confianza en la economía de libre mercado y el pragmatismo, y que hacía de la integración en Europa un objetivo prioritario. Con este programa básico el PSOE triunfó por mayoría absoluta en las elecciones de 1982, 1986 y 1989, y por mayoría simple en las de 1993. La labor de los diferentes gobiernos

socialistas —todos ellos presididos por Felipe González— afectó y transformó profundamente todos los aspectos de la sociedad española.

En el terreno económico, se modernizaron algunas de las industrias más anticuadas —metalurgia, construcción naval— al mismo tiempo que se liberalizaba y se desregulaba la economía y se privatizaban algunas de las grandes empresas públicas. La *reconversión industrial* y la liberalización resultaron en un incremento de la actividad económica y en un rápido crecimiento del producto interior bruto y de la renta per cápita y, con ello, del nivel de vida. A pesar de ello, el gobierno tuvo que enfrentarse al descontento de los obreros con los duros programas de ajuste y con las altas tasas de desempleo. El rápido crecimiento económico, además, creó en el país una cultura del enriquecimiento y del culto al dinero que elevó a la popularidad a empresarios y banqueros y llevó a los sindicatos a exigir al gobierno un giro social en su política económica y una distribución de la riqueza más equitativa. El gobierno reaccionó a estas exigencias con actuaciones sociales como la mejora de las pensiones de retiro y desempleo y el diseño de planes para facilitar el acceso de los jóvenes al empleo. Estas medidas no convencieron a los sindicatos, que en 1988 convocaron una huelga general que paralizó el país durante veinticuatro horas pero que sorprendentemente no dañó el prestigio del presidente.

La actividad política de los primeros gobiernos socialistas estuvo centrada en el desarrollo del Estado de las Autonomías —la aprobación en 1983 de los Estatutos de Autonomía de Madrid, Castilla-León, Extremadura y Baleares completó el mapa autonómico nacional— así como en la consolidación de la democracia y la reforma de la administración y de la educación.

En política interior, la atención de los sucesivos gobiernos se centró en la *lucha contra ETA* y en la reforma del ejército. La lucha contra ETA se hizo más eficaz, y durante estos años, las autoridades españolas contaron, por primera vez, con el apoyo de Francia, país en el

que muchos terroristas habían encontrado refugio hasta entonces. La reforma del ejército, por su parte, resultó fundamental para la consolidación de la democracia. El Ministro de Defensa Narcís Serra —un civil que no había prestado el servicio militar— llevó a cabo una profunda reestructuración de las Fuerzas Armadas mediante la racionalización, profesionalización y modernización de sus tropas y equipamiento y la redefinición de sus funciones —la defensa occidental dentro de la OTAN y la protección del territorio nacional. En apenas diez años el ejército pasó de ser una fuerza casi policial al servicio del franquismo a convertirse en una institución profesionalizada y moderna, subordinada al poder civil y alejada de las tentaciones del intervencionismo político.

La política exterior se orientó hacia la integración en Europa, la amistad con el Magreb (especialmente con Marruecos y Argelia), con Israel —estado al que se reconoció diplomáticamente— y con Latinoamérica, y a la normalización de



Felipe González (1997)

relaciones con los EE.UU. El éxito más importante de la diplomacia socialista fue la entrada de España en la Comunidad Europea como miembro de pleno derecho (1986). La integración en la CE y la permanencia en la OTAN —decidida por referéndum en 1986— definirían las líneas maestras de la política exterior española en los próximos años.

Los años de mayoría socialista fueron una época de crisis para el Partido Comunista, que había visto disminuir su base electoral con cada elección. En un esfuerzo por adaptar el partido a la España del momento y por recuperar la confianza de los electores, Santiago Carrillo —el líder histórico del comunismo antifranquista— dimitió y el partido pasó a manos de Julio Anguita. La retórica anticapitalista y antioccidental de este político y la caída del comunismo convirtieron al PCE —y a Izquierda Unida, la coalición que le sucedió— en partidos menores. Los partidos nacionalistas, por el contrario, vieron aumentar su importancia y su base electoral. El Partido Nacionalista Vasco y la coalición catalanista *Convergència i Unió* controlaron los gobiernos de sus respectivas regiones durante este periodo, y se convirtieron en importantes fuerzas políticas al nivel nacional. La derecha, representada por la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, se dio cuenta de que para superar su techo electoral necesitaba una profunda renovación que le permitiera lavar su pasado franquista. Tras varios intentos de reforma fracasados, en 1989 AP cambió su nombre por el de Partido Popular (PP) y eligió como líder a José María Aznar, un político joven que se propuso como objetivos fundamentales la renovación ideológica del partido y la apertura de éste hacia el centro.

La primera etapa del socialismo terminó en 1992, año emblemático en el que se celebraron el V Centenario del descubrimiento de América, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Estos eventos contribuyeron al prestigio internacional de España al tiempo que suscitaban críticas importantes contra la ostentación de las políticas socialistas. A partir de entonces comenzó la crisis del socialismo, causada por el desgaste de los años en el poder y por los numerosos escándalos económicos —tráfico de influencias, ventas ilegales de terrenos, apropiaciones de dinero público— y políticos —acusaciones de guerra sucia contra el terrorismo— que salieron a la luz pública entre 1992 y 1996. Estos escándalos acabaron con el ambiente de consenso en el que se venía desarrollando la vida política desde el comienzo de la transición y trajeron tensión y enfrentamiento entre los diferentes partidos. Felipe González, atrapado entre los escándalos y las presiones de los nacionalistas catalanes —cuyo apoyo en el Congreso mantenía a los socialistas en el poder— se concentró cada vez más en la política exterior mientras contemplaba casi impotente el agotamiento de su programa en el interior del país. La retirada del apoyo parlamentario de los nacionalistas catalanes precipitó el adelanto de las elecciones, que se celebraron en 1996 y dieron la victoria a los conservadores del Partido Popular.

Los gobiernos del partido popular (1996–2004)

El triunfo del Partido Popular en las elecciones de 1996 fue un síntoma más de la consolidación definitiva del régimen democrático y supuso la legitimación de este partido como organización democrática. La victoria electoral del PP fue posible no sólo por la crisis del PSOE sino también porque la derecha había realizado en los últimos años una profunda reforma interna. La llegada de José María Aznar y su equipo de colaboradores a los

puestos de dirección del PP supuso a la vez un relevo generacional e ideológico del partido. La derecha ahora estaba dirigida por individuos que no habían participado en la dictadura y que, por ello, no podían ser acusados de haber colaborado con el franquismo. Para subrayar aún más la ruptura con la vieja guardia de la derecha española, los dirigentes populares impulsaron —a partir de 1990— una renovación ideológica inspirada en la tradición liberal, en la política de la Restauración e incluso en algunas ideas de Manuel Azaña y desplazaron el partido hacia el centro del espectro político. Al mismo tiempo, y como reacción a las urgencias y excesos autonomistas del periodo de la transición, la nueva dirección del PP enfatizaba la definición de España como una única nación integrada por diferentes pueblos con distintas lenguas y culturas.

En el periodo 1996–2004, el PP ganó dos elecciones: la de 1996 por mayoría simple y la de 2000 por mayoría absoluta —en estas últimas los populares obtuvieron 184 diputados, frente a 125 del PSOE y 8 de IU y fueron el partido más votado en todas las capas demográficas y en casi todas las regiones— por lo que se ha mantenido en el gobierno durante dos legislaturas. Los resultados de las elecciones de 1996 obligaron a José María Aznar —presidente del Gobierno durante todos los gobiernos del PP hasta las elecciones de marzo de 2004— a contar con la colaboración de los nacionalistas catalanes y vascos para poder gobernar. Este pacto entre la derecha y los nacionalistas contribuyó a mitigar los recelos que habían caracterizado las relaciones entre ellos en el pasado y a extender la imagen de una nueva derecha centrista, moderada y tolerante.

Durante el primer gobierno del PP, la política económica de Aznar se centró en el cumplimiento de los requisitos para la entrada de España en la moneda única europea —el *euro*— y en la aceleración del proceso de liberalización y privatización de la economía iniciado ya por los gobiernos del PSOE. La economía pasó por una fase de crecimiento —la renta per cápita creció a 20.000 dólares— de apertura al exterior y de aumento de las exportaciones. El crecimiento de la economía y el aumento del nivel de vida transformaron el papel de España en la UE, ya que redujeron los fondos de cohesión aportados por ésta para ayudar al desarrollo de las regiones más desfavorecidas.

En el interior, Aznar enfatizó su compromiso con el Estado del bienestar y consolidó el Estado de las Autonomías; a finales de la década de los noventa se había producido un acercamiento significativo entre los niveles de competencias de todas las comunidades autónomas. Durante esta época las relaciones entre el PP y el PNV comenzaron a deteriorarse, al mismo tiempo que los políticos populares endurecían sus políticas antiterroristas y sufrían la violencia de ETA.

Los gobiernos populares han acelerado también la completa incorporación a la estructura militar de la OTAN. Desde 1996, contingentes de soldados españoles han participado en las operaciones militares del conflicto de Kosovo y en numerosas misiones de paz en la antigua Yugoslavia y en Afganistán, y un español —el socialista Javier Solana— llegó a desempeñar el cargo de Secretario General de esa organización. El progresivo alineamiento con los EE.UU. se ha manifestado en actuaciones como el apoyo de Aznar —contra la opinión pública española— a la política estadounidense en Irak o en las críticas a la Cuba de Fidel Castro.

Las elecciones de marzo de 2004

El 14 de Marzo del año 2004 se celebraron unas nuevas elecciones generales en España. A pesar de que todos los sondeos pronosticaron una nueva victoria del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo una mayoría relativa de votos: el 42,6%, frente al 37,6% de los conservadores. Otros resultados interesantes fueron la subida de los independentistas catalanes de ERC —15,9% de votos en Cataluña— y el descenso del nacionalismo gallego —cuyo apoyo bajó del 18,6% del año 2000 al 11,7%— y de los comunistas de Izquierda Unida —a quienes sólo votó el 5% de los electores.

El brutal atentado cometido en Madrid por terroristas islámicos el 11 de marzo —y que causó cerca de doscientos muertos y unos mil quinientos heridos— la insistencia del gobierno en atribuir a ETA los ataques cuando todo apuntaba a una conexión islámica y las sospechas de manipulación informativa, cambiaron en sólo tres días la intención de voto de unos dos millones de electores. Los españoles —ya mayoritariamente opuestos a la guerra de Iraq y a la estrecha colaboración entre José María Aznar y George W. Bush— dieron su apoyo al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien había prometido retirar las tropas españolas de Iraq (aunque no de Afganistán) y acercar la política internacional a las posiciones de Alemania y Francia.



Ve a **De la Red** de este capítulo en www.prenhall.com/espanaayerhoy. Allí encontrarás sitios de información muy interesante y de fácil acceso.